

Porque aquí yo veo que no juzgamos solo á Gomez Cuervo.

Yo, señor, soy enteramente extraño á las pasiones que en estos momentos surgen en el Estado de Jalisco: no conozco á su actual gobernador, y acaso lo estimaré por sus virtudes cívicas.

Pero en aquel de sus actos de que se ocupa hoy el jurado, ha cometido sin duda un error, como se decía en este mismo recinto el año de 1861; los errores en política son crímenes, y esos crímenes nosotros estamos aquí para juzgarlos.

La cuestión, tal como la ha planteado el defensor, tiene dos facetas de vista bajo las cuales debe examinarse: la social y la jurídica.

En ambas saltan cargos contra el acusado, que no se han podido contestar.

Como acabamos de oír en la brillante defensa del abogado del gobernador de Jalisco, este se encontró arrastrado por la suprema ley de la necesidad.

El Estado sufría el malestar horrible del vandalismo: los ciudadanos eran plagiados en las calles mismas de la capital, arrancados de sus hogares y estorsionados por un poco de oro.

La sociedad amagada se sacudía, pidiendo á gritos un remedio radical.

Entonces expidió la legislatura su decreto núm. 61 trasluciendo la órbita de sus atribuciones.

Aquí arguye el defensor contra un cargo imaginario, que el gobernador no pudo excusarse de promulgar esa ley. Su misión entonces no es otra que publicar las leyes de la legislatura, sin tener mas misión que la que se confiere en semejante caso á un agente de policía.

¿Y la constitución, señor?

No muy lejos, en su art. 1º dice: «El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente constitución.»

Hé aquí en este principio que inicia como un santo lema de nuestro código, la obligación de conservar incólumes los preceptos constitucionales; hé aquí destruido este punto de la defensa.

El gobernador de Jalisco no estaba, pues, obligado á las prescripciones del decreto de la legislatura de su Estado, porque esta no

puede derogar nuestro código fundamental.

En el seno del congreso de la Unión, nosotros no hemos aceptado la pena de muerte al suspender las garantías, y la legislatura de Jalisco si la aplica en los delitos de plagio y robo.

¿Y qué, con sangre, señor, se reconstruye una sociedad y se pone un precio al crimen?

La última pena es impotente para producir el bien, como lo es para refrenar el mal.

¿A quién y para qué ha servido?

La sociedad antigua, cuando apareció el cristianismo, se creyó amagada en su existencia por la secta nueva. Y se vertieron mares de sangre en los circos romanos inútilmente.

El partido conservador también la ha derramado á torrentes, sin conseguir parar el progreso ni sofocar la libertad.

Reconozco que no hay paridad entre estos recuerdos históricos y su aplicación al caso presente; pero deben tomarse los dos extremos mas opuestos de la cadena para demostrar mi aserto.

El patíbulo jurídico lleva siglos de estar levantado en las sociedades cultas, sin que por esto disminuya en su cifra la estadística criminal.

Y no se nos diga que aquí amparamos al ladrón ni al plagiario.

Desde el momento en que se conoció en Jalisco la acusación de su gobernador, se ha lanzado contra el congreso la inculpación de que aquí queremos proteger el vandalismo. Así lo dicen la prensa oficial, las correspondencias, hasta el anónimo sirve para propagar esa especie. Yo la rechazo con vigor, porque nosotros solo buscamos la inviolabilidad de la ley.

Si ante la suprema ley de la necesidad tenemos que acallar muchas convicciones, y permitimos que se aplique al plagiario y al ladrón la última pena, hágase enhorabuena, pero respetando las fórmulas legales. Como ya antes he dicho en este recinto, la cuestión es de horas; mátese al reo, pero téngase antes la certeza de que lo es. La vida humana algo vale; lo suficiente para que detengamos la ejecución hasta la comprobación del delito; si matamos, sepamos siquiera á quién y por qué.

Y mas, señor, que el remedio es ineficaz, como acaba de confesar el mismo defensor del gobernador de Jalisco. Este Estado guarda la misma situación que antes de la

ejecución de los cuatro ó cinco plagiarios supuestos, y no hace muchos días que se han vuelto á cometer esos crímenes.

Como ve el gran jurado, la cuestión social no atenúa el cargo.

¿Y la jurídica?

El procedimiento del gobernador de Jalisco es notorio.

Entablado el juicio de amparo, el gobernador no obedeció el auto, y los presuntos reos fueron fusilados.

El defensor, para destruir este terrible cargo, dice que el juez de distrito equivocó el trámite, y que debía dirigirse á la autoridad municipal, en quien había delegado sus facultades el ejecutivo del Estado.

Y llama oficiosidad, la que hubiera cometido el gobernador de Jalisco aconsejando el trámite dando curso al auto.

Oficiosidad cuando se trata de cumplir con el deber constitucional de guardar y hacer guardar la ley!

Oficiosidad cuando se trata de la vida de cuatro hombres que acaso son inocentes!

El defensor arguye mas: que su defendido, en aquellos momentos se hallaba en la terrible alternativa de ser inculcado por la legislatura ó por el congreso de la Unión, de cometer una infracción legal, ó de sufrir la reprobación del pueblo de Jalisco.

Señor, cuando una autoridad se coloca en ese difícil dilema, cúlpese á sí misma que acepta una posición falsa por salirse del carril constitucional, porque ante todo, debe recordar que el deber no se sacrifica en aras de la popularidad.

Debió, pues, obedecer el auto del juez de distrito, y si no lo hizo, nosotros debemos condenarlo.

El general Escobedo acaba de dar una muestra de su acatamiento á la ley. Entablado el juicio de amparo por unos soldados, desde el momento en que se le comunicó el auto, los puso en libertad. Y acaso se trataba de delitos del orden puramente militar; pero el general Escobedo, como un buen patriota, obedeció ciegamente la ley.

Y, no comparo, porque esto no es posible; el mismo gobernador de San Luis, cuya conducta administrativa es tan censurable, ha obsequiado cuantos recursos de amparo se le han comunicado.

Nosotros, señor, no debemos, pues, dejar sentado como un buen precedente la conducta de Gomez Cuervo, absolviéndolo del cargo, porque esto traería una imitación trascendental y de pésimos resultados.

Hoy, que esa sociedad se constituye bajo bases sólidas, debemos prestarle todo el apoyo de las garantías constitucionales.

En la edad media, cuando en aquella legislación bárbara la ley carolina daba como una garantía probatoria intachable, el tormento, cuando el código penal tenía un solo artículo, el verdugo, entonces, señor, había el *asilo*, ese santuario de la vida que nadie violaba. Y el asilo estaba en el templo, al pie de una cruz, en un *in pace*, bajo el manto de un colegial, junto al sayal de un monje..... ¡Y hoy, en nuestra civilización, dejamos romper el derecho de asilo que reside en el juicio de amparo, desde el momento en que por la necesidad toleramos leyes de sangre y tribunales especiales!

Ese derecho de asilo lo ha violado el gobernador de Jalisco, parapetándose en la pueril disculpa de un trámite, cuando se trataba de fusilar tres reos.

Señor, nosotros estamos aquí para hacer respetar la ley fundamental. Y sin ocuparnos de la personalidad que aquí toquemos, ni de la autoridad que destronamos, por poderosa que sea, cumplamos con nuestra conciencia.

Los que han caído, fusilados en Jalisco sin fórmula alguna de juicio, y sin que pudiera ampararlos la justicia federal, han salpicado con su sangre las hojas de nuestra constitución: nosotros estamos obligados á conservarlas limpias de toda mancha.

El C. ZARCO, presidente.—El C. Cañedo en contra.

El C. CAÑEDO.—El gran jurado ha podido notar por los diversos discursos que han empeñado su atención, que la gravísima y delicada cuestión que actualmente se ventila entraña dos principios distintos, que pugnan alternativamente en la discusión por alcanzar la exclusiva preponderancia en este augusto tribunal.

El primero de estos principios, reconoce por única norma el precepto abstracto constitucional.....

El segundo, no desoye la voz que impetiosa clama por aquellas garantías sagradas que constituyen la base fundamental de todo pacto social, por las garantías elementales de la vida y de la propiedad, por el derecho de propia conservación.

Aquel invoca el texto de la ley, la ciega aplicación de una teoría política muy recomendable.

Este reclama la conveniencia pública, la

seguridad privada, la práctica de una exigencia social.

Por una parte se exige todo el lujo, todas las delicadezas, todo el aparato inherente al mas perfecto modo de ser.

Por la otra se pretende, que antes de alcanzar este complemento de una organización política y social que nada deja que desear, se requiere disfrutar de la condición preliminar, imprescindible e imperiosa de ser, de existir. La causa tiene que preceder á los corolarios que de ella se deducen.

Entre estos dos puntos de vista tan opuestos en apariencia, no media, sin embargo, una distancia tal, que el patriotismo, la ilustración y solícita imparcialidad de esta augusta asamblea, no puedan salvar, en obsequio de los pueblos de Jalisco, en obsequio de aquella desgraciada fracción de la gran familia mexicana, sacrificada durante tanto tiempo al vandalismo mas deshecho, al yugo mas humillante é insoportable.

Una cosa, señor, es discutir fría y filosóficamente en el seno del parlamento, respecto de la mayor ó menor legalidad que asiste á ciertos hechos, respecto de males que no se divisan, sino en lontananza, sin afectarnos directamente; y otra cosa el palparlos de cerca, ver la tormenta diariamente suspendida sobre la cabeza, como la espada de Damocles.

Entonces los ánimos se exaltan, se exacerbaban las pasiones y la exaltación alcanza el último grado de intensidad.

Esto es lo que ha sucedido en Jalisco; aquel pueblo esperó en vano con una paciencia admirable, que se remediaran los males que sufría; pero cuando llegó á comprender que era abandonado á sus exclusivos medios de acción, vibró muy alto en él la voz de la propia conservación.

Obedeciendo á las exigencias apremiantes que ya no era posible aplazar, intimó, por decirlo así, la orden á sus representantes, de expedir á la mayor posible brevedad una ley severa y eficaz para amedrentar á tanto miserable, que pugnaba por enseñorearse de la situación en fuerza de crímenes, de audacia y de impunidad.

Al obrar de esta manera, la sociedad jalisciense usó de un derecho que nadie le podrá negar.

Al satisfacer tan justa pretensión, la legislatura no hizo sino convertirse, como era de su deber, en el eco de la voluntad manifiesta del pueblo.

Y al hacer cumplir la ley expedida por la

legislatura, el gobernador acató lisa y llanamente las prescripciones explícitas y terminantes de la constitución de Jalisco.

Aquí cabe una consideración de suma importancia, y muy digna de llamar la atención del gran jurado.

Diferentemente de lo que sucede en algunos otros Estados de la federación, el de Jalisco no concede á su gobernador la facultad de hacer observación alguna á la legislatura, antes de promulgar las leyes que de ésta emanen. Su obligación se reduce á publicarlas, cumplirlas y hacer que se cumplan debidamente; reservándose el poder legislativo local, toda la responsabilidad correspondiente.

Se ve, pues, claramente que el C. Gomez Cuervo no ha obrado en virtud de una iniciativa personal; que no había tomado participio chico ni grande en la expedición de aquella ley que tanto se censura. El no era sino un instrumento pasivo, un agente subordinado á la legislatura é irresponsable á todas luces.

Mas al formar, tanto el pueblo como sus autoridades legislativa y ejecutiva, una unión perfecta para llevar adelante el plan salvador que se había iniciado, afirmo que merecieron bien todos, de la sociedad en general.

En este punto parece estar acorde la mayoría de los ciudadanos diputados, á quienes tengo la honra de dirigirme.

No se cuestiona la propiedad del hecho eminentemente moral, por medio del cual se dió un golpe terrible al insolentado bandidaje, sino tan solo el haberse desentendido de la forma constitucional en que esto debió efectuarse, después del amparo concedido por el juez de distrito.

No es, pues, la esencia misma de la cuestión que mas preocupa, sino el aspecto bajo el cual ésta se presenta.

Este escrúpulo no puede sobreponerse á las consideraciones que el mismo caso sugiere.

Si bien la ejecución de los cinco plagiarios á que se refiere el expediente que se nos ha leído, pugna con el texto de la ley, está, sin embargo, de acuerdo con el espíritu de la constitución, que proclama el imperio de todas las garantías individuales: que protege á los ciudadanos honrados, pacíficos y laboriosos; y tiende á cortar de raíz todo elemento emponzoñado, susceptible de corromper el corazón de la sociedad.

No por acudir á medidas extrañas de salvación de una manera pasajera, se puede

deducir que alguna localidad de la nación, pretende desconocer el pacto federal, ó arroja el guante á los poderes supremos de la república.

El hecho de que se trata, lo prueba de la manera mas palpable.

El pueblo y las autoridades de Jalisco han sido y son actualmente tan decididos, como el que mas, por el orden republicano y democrático de cosas que nos rije. Soberanas pruebas de patriotismo y lealtad tienen dadas; y si en lo futuro fuere preciso hacer de nuevo patentes estos sentimientos, estas convicciones, el Estado que tengo la honra de representar, seguramente se distinguirá de nuevo en este sentido.

¿Por qué, pues, dar á una cuestión sencilla y de poco mérito intrínseco, las proporciones colosales que ésta va alcanzando á medida que progresa la discusión?

Téngase presente, que si la conducta del ciudadano gobernador de Jalisco, ha herido algún precepto abstrato de la constitución, por otra parte ha prestado un servicio señalado á la sociedad, ha dado un paso de consideración en la senda del orden, de la paz pública y de la tranquilidad privada.

En las circunstancias terribles y excepcionales que presentaba hace poco Jalisco, creo firmemente que no solo era escusable en sus pueblos ocurrir á la ley severa y expeditiva que se impugna, sino aun iniciar en contra de los asesinos y plagiarios que pululaban en su territorio, aquella ley represiva conocida bajo el nombre de ley Lynch; y que, aunque contraria á todos los principios establecidos de justicia, ha producido patentes beneficios en algunos puntos de los Estados Unidos, que gemían, como Jalisco, bajo el puñal y la mortífera influencia de criminales de toda especie.

Léjos de impugnar las medidas enérgicas que se han tomado en Jalisco contra el vandalismo, yo estoy orgulloso de que allí se hayan iniciado, porque esto demuestra en ese pueblo un principio vital, un brio y una energía de buen agüero para su porvenir político y social.

En los momentos presentes, después de haber destruido el elemento teocrático que dominó al país por espacio de tres siglos y medio; después de haber acabado con aquella tiranía militar que se impuso á la nación desde los primeros días de la independencia; después de haber, en fin, dado el golpe mortal al extranjerismo que pretendió dominar los destinos de nuestra patria; después de

haber alcanzado tan señalados y gloriosos triunfos, nos queda todavía uno pendiente: el que implique la total destrucción del bandidaje en toda la extensión de la república; el que anuncie la final desaparición de esa lepra social, que esteriliza en la actualidad todas las demás conquistas adquiridas al precio de tantas lágrimas, y de tanta sangre.

Toda medida que tienda á este fin, la reputo salvadora, y Jalisco tiene la honra de haber entrado en tan buen sendero.

Las consideraciones que preceden, constituyen indudablemente una circunstancia atenuante, en obsequio del gobernador que ha servido de instrumento para iniciar en Jalisco esta política, que apetece todas las clases laboriosas y productoras de la nación. Otra consideración de igual naturaleza es, que la situación crítica del ciudadano gobernador de Jalisco, colocado en la disyuntiva de pugnar con su soberano local, la legislatura del Estado, ó bien con los poderes federales, es debida á una laguna que existe en nuestro código fundamental; y que en el seno del congreso constituyente señaló á la atención de los legisladores supremos de la nación, nuestro honorable compañero el C. Mata, si mis recuerdos no me engañan.

Esto quiere decir que existen causas, hijas de la imperfección de nuestra constitución federal, á la que tanto falta aún para completarse, cuyas causas tienen que producir los efectos que en la actualidad deploramos.

Pero afortunadamente el gran jurado, á que tenemos la honra de pertenecer, no tiene la precisión de concretarse á los estrechos límites que circunscriben la acción de los tribunales comunes. No tiene el exclusivo encargo de convertirse en una máquina judicial. La misión es infinitamente mas elevada, pues le es dado pesar en su conciencia, no solo los hechos en sí mismos, sino tambien las consideraciones morales de esta política y conveniencia pública, que median en pro ó en contra de determinadas resoluciones, en pro ó en contra de sus fallos definitivos.

En vista de este carácter augusto y trascendental, no querrá convertir al gobernador de Jalisco en el chivo expiatorio de la situación, en la víctima destinada al suplício, teniendo en cuenta que su acción se ejerció en beneficio de los mas sagrados derechos de la sociedad; y repugnará, no lo dudo, aquella doctrina farisáica que preten-

de no ser lícito hacer el bien en sábado, contrariamente al texto expreso de la ley.

El C. ZARCO dejó la presidencia al C. ROMERO RUBIO.

El C. ROMERO RUBIO, vice-presidente.—El C. Zarco en pro.

El C. ZARCO, presidente.—No quería yo hacer uso de la palabra, porque huía de hablar contra el acusado. No hay duda de que el papel de defensor es mas atractivo que el de acusador, y no quisiera con mis palabras agravar la situación del C. Gomez Cuervo. Pero se han vertido tales especies, se han aducido tales razones por los defensores del acusado, que á pesar mio, me veo precisado á hacer algunas rectificaciones.

El principal fundamento en que se ha apoyado la defensa, es el de que, la situación violenta en que los plagiarios habian puesto á Jalisco, exijia la conducta que la legislatura y el gobernador han observado; y para inclinar el ánimo del jurado á pronunciar una absolucion, se llega hasta predecir un trastorno público.

A pesar de los síntomas alarmantes que, desde el principio de esta cuestion, se dice que se han despertado en el Estado de Jalisco; á pesar de las predicciones de perturbacion de la paz pública, que se nos está repitiendo, la verdad es que el acusado ha venido á inclinarse ante el jurado, que ha intentado justificar su conducta, y que el pueblo de Jalisco, permanece y permanecerá tranquilo, porque respetará el fallo de la ley.

Nuestro deber, sobre toda consideracion individual, es hacer justicia, y no dar motivo para que se repitan y aun justifiquen las calumnias que siempre se nos han hecho, de que no sabemos gobernarnos.

Yo he defendido por la prensa la soberanía é independencia de los Estados en su régimen interior; he sostenido que el congreso no tiene derecho ni de aun revisar los decretos expedidos por los Estados; pero si he sostenido esto, tambien sostengo como una verdad indisputable, que sobre las leyes y sobre las constituciones de los Estados están la constitucion y las leyes federales; y que si debemos respetar el gobierno interior de las localidades, no debemos consentir en que se viole la constitucion.

El defensor del Sr. Gomez Cuervo ha sido bastante hábil; se captó la benevolencia del auditorio, y todos sentimos que no haya tenido mejor causa que patrocinar; pero, con todo y su brillante estilo, no ha podido

disminuir ni en un punto la culpabilidad de su defendido.

He observado que tanto él como los demas ciudadanos que han tomado la defensa del acusado, se han detenido en desvanecer un cargo que no se le hace. Han pretendido sostener el derecho ú obligacion que tuvo para promulgar el decreto de la legislatura. El cargo no es haber publicado ese decreto, sino haberlo cumplido. Debió recordar que ninguna ley en la tierra es superior al pacto fundamental; debió recordar lo que previene la ley de 30 de Noviembre de 1861, y aprovecharse de la oportunidad que le presentó el juez de distrito al decretar el juicio de amparo.

La responsabilidad de aquellos asesinatos que recuerdan los de Tacubaya, se quiere hacer caer toda sobre el jefe político porque él los juzgó y los condenó; y se pretende que el gobernador no tenia obligacion de, y que hubiera sido una oficiosidad de su parte, decir al juez de distrito á quien se habia de dirigir para obtener la suspension de aquella carnicería.

En el siglo en que vivimos, en un país civilizado y en plena constitucion, se nos viene á decir que no se debe enseñar el camino para salvar la vida de un hombre!

La ley de amparo dice en su artículo 14: (leyó); y esto es lo que ha hecho el juez; y el gobernador violó la constitucion, consumando las ejecuciones que no han sido mas que asesinatos.

He demostrado que el defensor ha sido poco hábil al querer hacer recaer la culpabilidad sobre el jefe político; y no es así, porque la responsabilidad pesa sobre el gobernador.

Se ha pretendido sostener que aquella ley es hija de la situación, y que solo se dió contra los bandidos; se ha querido sostener que esa ley se dió para asegurar las garantías; pero se olvida que las garantías de la sociedad se componen de la reunion de las garantías de los individuos, y que ejecuciones como ésta espantan á la sociedad en donde no hay ley de Lynch.

Esta ley, es un resto de barbarie que existe en los Estados-Unidos; porque por desgracia de la humanidad, en el país que parecia ser el mas civilizado, hay aún restos de barbarie. La ley Lynch, que por honor del jurado no debia invocarse aquí, es un abuso que se comete cuando se cree que el juez se dilata en castigar al delincuente. Entonces las turbas se levantan, se arrojan

sobre la cárcel, y el incendio y la muerte son los resultados de esa estúpida ley.

No; digámoslo por honor del país. El pueblo mexicano no se lanzará jamás á semejante exceso; no cometerá esos asesinatos.

Se ha dicho que las víctimas del 24 de Febrero eran unos miserables. No es noble insultar á los muertos, y ni siquiera sabemos que eran plagiarios esos desgraciados. Entraron en la cárcel sin expresarse el delito, y así consta en los libros del alcaide. ¿En qué principios se apoyaron para condenarlos?

La constitucion prohíbe suspender las garantías que aseguran la vida del hombre; la ley para castigar bandidos y trastornadores de la paz pública, ha respetado esa garantía; y los que deseamos la abolicion de la pena de muerte, apenas si soportamos una ejecucion llevada á cabo, despues de cumplidas las formas tutelares de la legislacion, y nos hierve la sangre contra asesinatos como los perpetrados en Guadalajara.

Pero se dice que las circunstancias exijian la publicacion de la ley y su cumplimiento, y que la alarma en que se hallaba aquel Estado ha cesado con el cumplimiento de esa disposicion sanguinaria. No es cierto. Desde ántes y despues de la promulgacion de ese decreto hasta ahora, he recibido periódicos y cartas de Jalisco, y no hay uno solo de ellos en que no se hable de robos, de plagios y de asesinatos. Esto desmiente de una manera solemne la absurda y calumniosa especie, de que los malhechores se han envalentonado, en cuanto supieron que el congreso juzgaba al gobernador Gomez Cuervo por los atentados del 24 de Febrero. Y esa calumnia, señores jurados, yo la rechazo en nombre del país.

Se apela á las circunstancias. Y ¿qué circunstancias mas graves que aquellas en que pelagra la vida del hombre? Se ha dicho que el juez acudió tarde. El juez acudió cuando le llamaron, y acudió empeñosamente á cumplir con su deber, puesto que en el proceso se ven autos decretados á las cinco y á las cinco y cinco minutos de la mañana.

El gobernador se disculpó con que él no habia condenado á los reos; esta respuesta es semejante á la de Cain cuando le preguntó Dios: ¿qué has hecho de tu hermano?

El Sr. Gomez Cuervo dijo que aquellos hombres tenian alarmada á la sociedad, y que si no se ejecutaban, el pueblo se suble-

varia. Y no es cierto que se hubiera sublevado, sino que se habria sometido á la ley.

¿Qué clase de Estado, qué clase de ciudad son esos, que no se consideraban seguros hasta que cinco hombres pudiesen?

Se ha querido hacer un cargo á la autoridad federal por su conducta, y se trata de justificar á una autoridad que es la culpable de la inseguridad. Se insiste en que los malhechores se han reanimado á la noticia de este encausamiento. Puede que ninguna gavilla de bandoleros sepa que juzgamos al Sr. Gomez Cuervo.

Se ha dicho que el pueblo no comprende sus derechos y que hay lagunas en las leyes. El pueblo comprende sus derechos; y si hay lagunas en las leyes, debemos de llenarlas legalmente.

Se habla de que la conveniencia pública exige la absolucion del acusado. Esto es inmoral, sobre todo, tratándose de jueces de hecho. Debemos obrar con justicia, sin consideracion ninguna personal. Si no lo hiciéramos así, la sociedad no podria existir.

Se trata de saber si han sido violadas la constitucion y la ley de amparo. Convidados en este hecho, debemos votar contra ese atentado.

La conveniencia pública que no invocaré, quiere que convencidos de la culpabilidad del acusado, lo condenemos.

El día que el pueblo vea que un gobernador, ú otros funcionarios públicos, caen legalmente, ese día quedarán asegurados los grandes principios de la república.

Ruego al jurado que mirando la cuestion bajo el punto de vista de la justicia, declare culpable al gobernador de Jalisco.

El C. ZARCO volvió á ocupar la presidencia.

El C. ZARCO, presidente.—El C. Rodriguez Ramon, en contra.

El C. RODRIGUEZ RAMON.—Despues de los discursos que el gran jurado acaba de oír, parece que se ha dicho la última palabra en la cuestion; sin embargo, me permito hacer algunas observaciones y rectificar algunos hechos, porque creo que esto contribuirá eficazmente á esclarecer la cuestion. El C. Zarco ha dicho que los defensores del Sr. Gomez Cuervo se han empeñado en impugnar un principio que nadie defiende, cual es el de la incompetencia del congreso nacional, para derogar ó modificar la ley número 61, expedida por la legislatura de Jalisco; agregando que la verdadera falta del

Sr. Gomez Cuervo, es no haber acatado la disposicion del juez de distrito, en que se le prevenia suspendiera las ejecuciones que han sido materia de este proceso.

Esto es verdad, señores, y la cuestion puede plantearse en estos términos. ¿Faltó al cumplimiento de su deber el Sr. Gomez Cuervo, al no acatar la prevencion del juzgado de distrito?

El C. Zarco ha dicho que sí, apoyando su opinion en el art. 14 de la ley de 30 de Noviembre que, hasta la parte leida por este señor, no deja lugar á duda en el sentido de su opinion; pero su parte final resuelve este caso en un sentido enteramente contrario.

La parte leida por el C. Zarco, dice que los jueces de distrito (en casos como el de que se trata) deben dirigirse al superior de la autoridad, cuyas determinaciones violen las garantías individuales; pero el artículo continúa, y dice: «siempre que el inferior no haya acatado el auto de amparo despues de tres dias de habérsele notificado.» Esta es la parte que omitió el C. Zarco, y la que terminantemente decide la cuestion.

Está demostrado en el escrito de acusacion y en las declaraciones de testigos y acaides que corren á fojas 11 y 62 del proceso, que los reos fueron aprehendidos y encarcelados por orden del jefe político: que fueron sentenciados por él, y que en virtud de sus órdenes iban á ser ejecutados. Nadie ha dicho una sola palabra en contrario, ni hay datos para que se diga. ¿A quien, pues, debió dirigirse el juez de distrito? Incuestionablemente al que violaba las garantías individuales. Al que aprehendió, encarceló, sentenció é iba á ejecutar á los reos. Al jefe político, en una palabra. ¿Lo hizo así, señores? Notoriamente no. Se dirigió á una autoridad que no violaba ninguna garantía, que no cometia ninguna falta. Y esta autoridad, que como fué el gobernador del Estado, pudo haber sido el obispo de Guadalajara, hizo lo que este último pudo haber hecho, contestar que no obedecia la prevencion del juzgado de distrito. Y este faltaba á su deber no cumpliendo con la ley que le manda interponer su autoridad, dirigiéndose al que infrinje las leyes federales.

Es bien sabido que el funcionario que en el ejercicio de sus facultades falta al cumplimiento de la ley, no tiene derecho á ser obedecido, porque la ley es ántes que el funcionario.

De todo esto resulta claro é incontrover-

tible: que el juez de distrito no debió dirigir su auto de amparo al gobernador del Estado, que no violaba ninguna garantía; sino al jefe político que era notoriamente el autor de la violacion: que el gobernador del Estado no estaba en la obligacion de obedecer al juez de distrito, supuesto que éste obraba arbitrariamente, y sin sujetarse á las prevenciones de la ley, sino ántes bien contravieniendo á ella; y por último, que habiendo usado el C. Gomez Cuervo de su mas perfecto derecho, al no acatar la determinacion de una autoridad que conculcaba la ley, no ha incurrido en delito de ningun género.

Podria objetarse que si el juez de distrito esperaba los 3 dias de que habla el art. 14 ya citado, para ocurrir al gobernador del Estado, el amparo hubiera sido ilusorio, porque los reos habrian sido ejecutados mucho ántes de que este plazo terminara. Esto es cierto. Pero no lo es, ni hay motivo para creer, que el jefe político no hubiera atendido la determinacion del juez de distrito; y aun supuesto este caso improbable, el juez de distrito hubiera podido ocurrir al gobernador del Estado, no interponiendo su auto de amparo, sino pidiéndole que obligara á su subalterno á obsequiar esta determinacion.

Entonces sí habria una grave responsabilidad contra el C. Gomez Cuervo, porque en este caso hubiera faltado notoriamente á su deber.

Pero supuesto que no fué así, el único responsable es el juez de distrito, por haber faltado á su deber, contraviniendo al expreso mandato de la ley.

El C. ZARCO, presidente.—El C. Sanchez Azcona, en pro.

El C. SANCHEZ AZCONA manifiesta que la única causa que lo hace votar en pro del dictámen de la seccion, es la de que el gobernador de Jalisco desobedeció á la justicia federal; y que si este hecho no se castigara, el resultado vendria á ser la anarquía para el país, porque se perderia el principio de que los Estados deben respetar la constitucion y las leyes federales.

El C. ZARCO, presidente.—El C. Prieto en pró.

El C. PRIETO.—Renuncio la palabra.

El C. VALLE, secretario.—¿Está suficientemente discutido?

El C. GUDIÑO Y GOMEZ.—Pido la palabra.

El C. ZARCO, presidente.—El C. Gudiño y Gomez.

El C. GUDIÑO Y GOMEZ.—No voy á de-

fender los asesinatos cometidos en Jalisco. Solo quiero manifestar al jurado, los resultados que habrá para aquel Estado y para la república, si se aprueba el dictámen de la seccion. En el Estado de Jalisco se envalentonarán los malhechores; y para la república puede suceder que cualquier juez de distrito destituya á un gobernador.

El C. VALLE, secretario.—¿Está suficientemente discutido?

Lo está.

(Leyó la parte resolutive del dictámen.)

Se pregunta si se aprueba en votacion nominal.

Antes de votar se lee el art. 105 de la constitucion, á pedimento del C. Rosas G.

Recogida ésta, dió el resultado siguiente:

Por la afirmativa:

Acevedo, Aguado, Aguirre Fernandez, Alas, Alfaro, Andrade, Angulo, Aragon, Avendaño, Avila, E., Avila Rafael, Balandrano, Balbontin, Baranda J., Baranda Pedro, Barron, Barros, Barroso, Beas, Benitez, Bernal, Caballero, Cacho, Candiani, Casco, Castañeda, Castellanos, Castro, Cendejas, Códex, Condés de la Torre, Chavarria, Diaz Mariano, Dondé, Doria, Escobar Carlos, Espejel y Blancas, Fernandez Justino, Frias y Soto, Galindo Manuel, García Margarito, García Brito, García Carrillo, Garibay, Gomez Cárdenas, Gonzalez Cosío, Gonzalez Paez, Guerrero Atenógenes, Guerrero Moctezuma, Hidalgo, Inda, Islas, Lama, Leyva Genaro, Loaeza, Lopez, Lozano, Macin, Mancera, Marin Esquivel, Mejía Francisco, Mejía de Leon, Mendiola, Mercado, Medrano, Morales Puente, Moreno Silviano, Moron, Muñoz, Mendez Vicente, Núñez, Pardo, Peniche, Peña y Montoya, Pizano, Prieto, Ramirez Juan, Ramirez J. José, Ramos Onofre, Ramos Santiago, Revilla, Rios y Valles, Riva Palacio, Robles Gil, Robles Martinez, Rodriguez Gil, Rojas, Rojo Mariano, Rojo Manuel, Romero Rubio, Saavedra, Sanchez Azcona, Santacilia, Sierra, Siliceo, Soto Manuel F., Tagle Antonino, Tagle Protasio, Torres, Tovar, Unda, Valle, Vega, Villada, Villareal, Yañez, Zamacona, Zamora, Zarco, Zérega.

Por la negativa:

Barreda, Baz José Valente, Blanco, Canseco, Cañedo, Contreras Elizalde, Escobar Juan, Fuentes Muñiz, Gudiño y Gomez, Gutierrez José María, Guzman Ramon, Herrera, Iglesias, Mariscal, Montes, Morales Antonio, Ortiz de Zárate, Palomares, Pan-

toja, Robert, Rodriguez Ramon, Sanroman, Zárate Julio.

El C. ALCALDE, secretario.—A la corte de justicia, para los efectos de la constitucion.

El C. ALCALDE leyó el acta, la cual se aprobó despues de una rectificacion que se hizo á mocion del C. Gudiño y Gomez.

El C. ZARCO, presidente.—Ha concluido el jurado.

Se levanta la sesion.

SESION DEL DIA 29 DE MAYO DE 1868.

Presidencia del C. Zarco.

A la una y media de la tarde, y estando en el salon 127 representantes, dió principio la sesion.

Leida y aprobada el acta del dia 27, la secretaria dió cuenta con las comunicaciones siguientes:

Del ministerio de justicia, acusando recibo de las adiciones hechas al presupuesto de su ramo.

Recibo.

Del ministerio de hacienda, acusando recibo de las adiciones al presupuesto de egresos.

A su expediente.

Del mismo ministerio acusando recibo de las copias de los expedientes sobre designacion de rentas y presupuesto de ingresos.

A su expediente.

Del mismo ministerio, haciendo observaciones sobre los proyectos de ley para que se concedan donativos á la familia Villagran y al C. Cirilo R. de San Miguel.

A las comisiones que dictaminaron.

Del mismo ministerio, acusando recibo del expediente sobre que el C. Antonio del Castillo continúe en el ensaye mayor de la casa de moneda.

Al archivo.

El gobierno del Estado de Puebla de Zaragoza comunica la resolucion de aquella legislatura, aprobando la ereccion del Estado de Coahuila.

A su expediente.

Se leyó y aprobó la minuta de la ley sobre designacion de rentas.

El C. ZARCO, presidente.—El congreso se erige en gran jurado.

El C. SANCHEZ AZCONA, secretario de la seccion del gran jurado, leyó el expediente